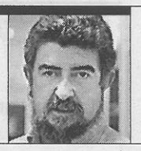
TRIBUNA

Isidoro Moreno
Catedrático de Antropología
de la Universidad de Sevilla



En los próximos veinticinco años sólo tendrán verdadero protagonismo las comunidades que reafirmen en sus propios estatutos su identidad nacional: las demás serán subalternas

Andalucía, realidad nacional

UN torrente de comentarios airados y despectivos, algunos de ellos insultantes, se ha desencadenado estos días al conocerse que en el preámbulo pactado por PSOE e IU para el nuevo Estatuto figura la expresión *realidad nacional* como definición de Andalucía. Calificaciones de "invento sin sentido", "falso problema" o "solemne majadería" se repiten en tertulias de radio y medios de prensa no sólo cercanos al PP –para el cual España sigue siendo una unidad de destino en lo universal, sin otra pluralidad posible que la de los coros y danzas–, sino también en los que usualmente respaldan (¿o tratan de controlar?) al PSOE desde la perspectiva de sus corrientes internas más jacobinas, defensoras férreas del nacionalismo de Estado bajo la máscara del republicanismo cívico (?). Influyentes poderes mediáticos madrileños y no pocos *barones* del partido –Ibarra, Bono o el propio Guerra, entre ellos– ya estaban suficientemente incómodos con Rodríguez Zapatero por su posición respecto al Estatuto catalán y al tema vasco como para no explotar ahora ante la propuesta de que Andalucía se defina claramente como una de las cuatro realidades nacionales existentes en el Estado, en consecuencia con lo conquistado el 28 de febrero del 80.

Porque de esto se trata precisamente. Cuando se está produciendo una reorganización territorial de las competencias que le quedan al Estado español, tras la cesión de gran parte de ellas a instituciones extrapolíticas –el Banco Central Europeo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio– y supraestatales –los organismos de la Unión Europea–, Andalucía debe optar entre defender la posición conseguida en los años de la transición a la democracia, al situarse como una de las cuatro nacionalidades de la vía rápida y la plena autonomía, o rehusar a ello, aceptando descender a la segunda división autonómica.

En los próximos veinticinco años, sólo tendrán verdadero protagonismo las comunidades autónomas que reafirmen en sus propios estatutos su identidad nacional. Porque sólo ellas podrán exigir de la administración central del Estado participación en las decisiones fundamentales que afecten al bienestar de sus ciudadanos y a su vida diaria, y financiación suficiente y justa. Y sólo ellas podrán hacerse escuchar en Europa. No situarnos entre las comunidades con identidad nacional sería aceptar la subalternidad y colocarnos en el numeroso pelotón de cola, dejando, además, toda la iniciativa política en manos de catalanes y vascos. Existen, pues, sólidos argumentos no sólo simbólicos sino también prácticos –como ha sabido captar inteligentemente el profesor Manuel Clavero y parecen haber entendido Chaves y Zapatero– para apoyar el reconocimiento estatutario de la realidad nacional de Andalucía, una vez que ha sido recogida por el Parlamento central la definición nacional de Cataluña y lo serán, con una u otra fórmula, las de Euskadi y Galicia.

Andalucía tiene una identidad histórica singularizada, una identidad cultural y una identidad política conquistada en la calle

Pero no se trata sólo de razones simbólicas y de oportunidad práctica: Andalucía tiene, en el mismo grado, al menos, que Cataluña y el País Vasco, una identidad histórica singularizada, una identidad cultural específica y una identidad política indudable, conquistada ésta en la calle, el 4 de diciembre del 77, y en las urnas, el 28 de febrero del 80. Posee, por tanto, una identidad nacional. Sólo desde las ideas liberal-burguesas ancladas en el siglo XVIII y desde el marxismo de tradición estalinista puede negarse esta evidencia y seguir defendiéndose, hoy, la idea de la correspondencia necesaria entre Estado y Nación que es la fuente justificadora de toda violencia nacionalista (en realidad estatalista), a la que somos ajenos los andaluces.

Sin duda, desde la Junta de Andalucía ha faltado la necesaria labor pedagógica, en estos veinticinco años, para que la mayoría de los andaluces tengan claro lo anterior y se autorreconozcan como tales no sólo culturalmente y en el sentimiento sino también políticamente y en la conciencia. Por ello, ahora, incluso dentro del Partido Socialista algunos señalan, al unísono con Arenas, que sólo tal o cual tanto por ciento de encuestados consideran a Andalucía esto o lo otro. Cuidado con esa trampa: en primer lugar, porque es sabido que, en gran parte, depende de cómo se haga una pregunta cuál sea la respuesta que se obtenga; y, en segundo, porque en cuestiones fundamentales la política debe marcar caminos y no sólo ser resultado de la media de las opiniones (si fuera así, no estaría abolida la pena de muerte, por ejemplo).

Y conviene denunciar otra mentira que se está repitiendo como si fuese una verdad obvia: ante el referéndum de febrero del 80 no hubo consenso alguno sino todo lo contrario. La derecha –entonces la UCD, aun siendo más presentable que el actual PP de las Azores– se opuso tenazmente a que Andalucía se equiparase con las otras nacionalidades históricas. Y el actual Partido Andalucista mantuvo una posición tibia, verbalmente radical pero sin involucrarse apenas en la campaña del referéndum, en espera de que el fracaso de éste le supusiera ventajas partidistas. No parecen haber cambiado mucho las posiciones en esta encrucijada.

El nuevo proyecto de Estatuto posee, sin duda, muchas lagunas, cuestiones manifiestamente mejorables y otras que merecen rotundo rechazo. Señálese todo ello y exijamos un marco de garantía para todos los derechos humanos, pero defendamos el reconocimiento de nuestra identidad nacional porque ello, lejos de ser irrelevante, es un prerrequisito para hacer posible esa opción.

CRÓNICA PERSONAL

Pilar Cernuda

Cuatro millones

CUATRO millones de firmas. Un montón, una barbaridad. Las ha recogido el PP, es cierto, pero aun así esos cuatro millones no pueden ser considerados parte de una estrategia política, porque son la prueba palpable de que cuatro millones de españoles rechazan la política territorial de Zapatero y el Estatuto de Cataluña. Cuatro millones. El diez por ciento de la población ha dado el paso de acercarse a una mesa y escribir su nombre y su número de carné de identidad. Que sí, que lo ha pedido el PP, pero eso no invalida el hecho de que un número exagerado de ciudadanos le está diciendo al presidente de Gobierno que no comparte sus decisiones sobre un hecho muy concreto: el mapa autonómico que nos quiere meter a la fuerza, con calzador.

Cuando Aznar se empeñó en la guerra de Iraq, también el PSOE movilizó la calle, con centenares de miles de españoles en manifestación expresando su repulsa a una guerra de Iraq en la que nunca debimos haber tenido un papel. Rodríguez Zapatero y la dirección de su partido se pusieron en cabeza de los manifestantes, junto a una plataforma de artistas muy cercanos al PSOE y a IU. Decía entonces Zapatero que Aznar no podía encogerse de hombros ante el sentir ciudadano, y tenía más razón que un santo. Aquella guerra fue un error que no ha pagado Aznar sino Mariano Rajoy, pero esa cruz la llevará colgada el ex presidente el resto de su vida, porque hizo perder las elecciones a su partido.

Zapatero, el que tanto clamaba para que Aznar escuchara el clamor de los manifestantes, está obligado a hacer lo mismo. Cuatro millones de firmas son muchos millones. Porque a ellas hay que sumar las de infinidad de españoles que no han firmado por miedo, o por falta de ganas, o porque no les gusta firmar nada que venga de la mano de un partido, o porque no tuvieron oportunidad.

Zapatero sabe que esos cuatro millones representan sólo una parte de los españoles que abominan de su política respecto a las reformas estatutarias, y si fuera coherente consigo mismo debería tener en cuenta ese rechazo masivo antes de seguir adelante con unas iniciativas que provocan desazón, desconcierto, preocupación por el futuro de España y, sin ninguna duda, sensación de que el Estado sale muy debilitado de esta peripecia.

No lo hará. Le pierde la soberbia, igual que le ocurrió a Aznar en su momento. Pertenecen los dos al grupo de dirigentes que jamás aceptan una sugerencia, que nunca reconocen que se equivocan, que desprecian a quienes no comparten su criterio.

No es nuevo que un político actúe de esa manera. Al contrario, son multitud los que, alcanzado el poder, cambian de arriba abajo, apostatan de lo que defendían, no escuchan a quienes antes consideraba buenos consejeros, no aceptan que nadie ponga un "pero" a su gestión.

Cuatro millones de firmas. Un montón. Una barbaridad. Pero a Zapatero le importan un bledo.

LA CIUDAD Y LOS DÍAS

Carlos Colón

Mala conciencia

ESTOY de acuerdo en que se quiten los símbolos del franquismo de la ciudad. Que se derriben los juzgados del Prado y la calle Imagen. Que se tiren los grandes almacenes y se reconstruya el Hotel Madrid y el palacio Sánchez-Dalp. Que se derriben los edificios de la Campana que asesinaron el bello capricho modernista de Aníbal González, en el que estuvo el Gran Café de París, y la farmacia Central. Que se inmole el espantajo alzado sobre el solar del Teatro San Fernando y que se dinamiten los horrendos edificios neo-sevillanos y *yeyé* que ocuparon en la Avenida el lugar de nobles inmuebles regionalistas. Que se vuele de una punta a otra Los Remedios, tan mal y tan retorcidamente trazado como escaparate de las virtudes del bienestar franquista y trastienda de sus vicios especulativos. Que sea derribado ladrillo a ladrillo todo lo construido en la plaza de la Magdalena, incluyendo algún mamarracho "de autor" firmado por una de las lumbreras de la arquitectura progresista de Sevilla, los bloques de pisos que borraron la amable Plaza Nueva provinciana del XIX o la pesadilla neosevillana que ocupó el lugar de la Universidad Literaria.

Mientras prolonga la obra destructora del franquismo, el Ayuntamiento se empeña en borrar las huellas más superficiales del Régimen

Que borren las huellas del franquismo, sí; pero no las menos importantes, como nombres de calles o placas, sino las verdaderamente significativas, las que representaron la idea desarrollista, cateta y destructora del Régimen. Porque quitar los nombres a las calles o las lápidas de las fachadas pero dejar los edificios que representan la masacre franquista de la ciudad sería una operación incompleta, si no hipócrita. Si de lo que se trata es de borrar la memoria del Régimen y de hacer justicia a las víctimas habría que borrar también sus huellas edificadas y honrar la ciudad caída. Sobre todo habría que marcar distancias democráticas, cultas, modernas en lo nuevo y respetuosas con lo histórico, con lo que fue el proyecto franquista de Sevilla. Por el contrario, la ciudad "moderna" que ahora mismo está diseñando nuestro Ayuntamiento es la culminación de la ciudad "desarrollista" del franquismo. Las setas de la Encarnación casan tan bien con la calle Imagen como la Piel Sensible con los bloques modernos de la Cuesta del Rosario o la nueva pavimentación de la Plaza de San Lorenzo con los pisos que allí le robaron los cielos a Romero Murube.

Es significativo que el mismo Ayuntamiento que prolonga la obra destructora de las peores corporaciones franquistas tenga tanto empeño en borrar las huellas más superficiales que el Régimen dejó en la ciudad. Se parece demasiado a la mala conciencia del converso. Frente al gesto franquista-desarrollista de destrozar la calle Feria, la Encarnación o las plazas del Pan y de San Lorenzo, ¿qué representa que se quiten unos nombres o unas placas? Sólo el desahogo de una mala conciencia que necesita justificarse como progresista frente a estas actuaciones retrógradas.

→ccolon@diariodesevilla.es